

## “TRANSFORMACIONES EN LA COMUNICACIÓN, EL PERIODISMO Y LAS CULTURAS POLÍTICAS PARA UNA RECONCILIACIÓN NACIONAL EN DEMOCRACIA, JUSTICIA Y VERDAD”

Fabio López de la Roche<sup>1</sup>

El presente artículo intenta plantear, en una primera parte, algunos retos a la democratización del sistema comunicativo y de medios de comunicación en Colombia, que no necesariamente están relacionados todos con el proceso de paz actualmente en curso con las FARC, pero que de todas formas tienen que ver con él, en la medida en que el segundo tema de la agenda de diálogo Gobierno-FARC sobre Participación política contempla un punto sobre Acceso a Medios de Comunicación.

Pensando no sólo en el actual proceso de conversaciones de paz entre el gobierno Santos y las FARC, sino en una perspectiva de democratización de las comunicaciones en el país, en el mediano y largo plazo, haremos referencia a los procesos de democratización de las comunicaciones que tienen lugar en los últimos años en América Latina y a la situación colombiana frente a esas tendencias de política comunicacional que se desarrollan hoy día en la región.

1 Historiador. Ph.D. en Literatura Latinoamericana y Estudios Culturales de la Universidad de Pittsburgh, Pennsylvania. Profesor Asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales –IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Miembro del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia.

Sugerimos este horizonte no con el ánimo de ampliar la agenda de La Habana que creemos no debe tener por objeto la inclusión de todas y cada una de las demandas de democratización de la vida nacional, lo cual la haría inviable como ruta de reconciliación y solución del conflicto armado. Si bien los acuerdos de La Habana podrían abrir posibilidades inéditas de ampliación de relaciones de justicia y democratización política y social (y creemos que el debate ciudadano y los preacuerdos sobre el tema agrario y campesino de hecho han avanzado sustancialmente en esa dirección), muchas de las tareas de democratización de la vida colombiana constituyen un trabajo colectivo de mediano y largo plazo que tendrán que abordarse en el contexto del posconflicto.

En una segunda parte nos referiremos a dos problemas estructurales de la comunicación pública en Colombia que son generados y alimentados por la permanencia del conflicto armado y que podrían atenuarse o resolverse a través de una negociación exitosa de paz con las guerrillas: el de la fuerte presencia de la propaganda como género y modalidad de comunicación, abusiva para con la opinión y con la verdad informativa; y el de la tendencia a la estigmatización de los movimientos sociales, con el argumento de estar siempre infiltrados por la guerri-



lla. Argumentaremos que una negociación de paz exitosa puede contribuir a superar estos dos problemas de la comunicación pública, gubernamental y de los medios privados, favoreciendo al mismo tiempo la producción de una información más equilibrada y confiable y menos manipulada por los intereses económicos, políticos y militares. El segundo resultado benéfico de la superación del conflicto armado, puede llegar a ser el contar con unos movimientos sociales más organizados y menos estigmatizados y perseguidos, que puedan llevar a cabo sus actividades reivindicativas en contextos menos hostiles, para que de esa manera puedan contribuir a fortalecer los precarios niveles de asociación para la lucha por sus derechos que hoy caracterizan a la sociedad colombiana: tasas vergonzosas de 3,7 de asociación a nivel sindical y precarias e inexistentes formas de asociación para la defensa y promoción de los derechos ciudadanos en áreas claves de la vida social.

En una tercera y última parte nos referiremos a algunos ejes de debate alrededor de una comunicación para la paz, relacionados con el tema de la comunicación de los negociadores gubernamentales y de los voceros de la guerrilla en la mesa de conversaciones de La Habana, y con algunos aspectos relacionados con las transformaciones en la cultura política que tendrían que producirse desde las dos partes, pero también desde sectores de la sociedad colombiana (las elites dirigentes, los militares, las izquierdas, el sindicalismo) para que el proceso de paz pueda convertirse en un auténtico proceso social y colectivo de reconciliación nacional, más allá de las visiones de las cúpulas negociadoras de las FARC y el gobierno.

Las ideas y propuestas desarrolladas en el presente artículo van dirigidas algunas específicamente a los voceros de las partes en

la mesa de La Habana, y la gran mayoría, a distintos grupos y sectores de la sociedad colombiana, que son los que tienen que desarrollar desde sus prácticas y comportamientos cotidianos, el espíritu de convivencia, tolerancia y de reconciliación nacional, luego de un eventual acuerdo de paz, ojalá en perspectiva de democratización de las comunicaciones y de ampliación del pluralismo informativo, como también de redistribución y de justicia social, sobre todo con respecto a la población campesina, históricamente abandonada, golpeada por la violencia y los actores de la guerra, e invisibilizada tanto por los políticos como por los medios de comunicación y el periodismo.

En algunos de los apartados del presente artículo, formularemos explícitamente algunas preguntas y propuestas a nuestros lectores pero también a algunos actores institucionales.

### **I. La excepcionalidad colombiana en el marco de la democratización comunicacional latinoamericana actualmente en curso<sup>2</sup>**

En varios países de América Latina se vienen promoviendo leyes de medios que tienen un sentido desconcentrador, antimonopólico y redistributivo de la propiedad de los medios.

2 Para una visión menos sintética de los procesos de democratización de las comunicaciones y de los sistemas de medios en América Latina, sus tensiones y contradicciones, pueden consultarse, entre otros trabajos: Susana Sel (coordinadora), *Políticas de comunicación en el capitalismo contemporáneo. América Latina y sus encrucijadas*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, Buenos Aires, 2010; Angelika Rettberg y Omar Rincón (compiladores), *Medios, democracia y poder*, Universidad de los Andes, Bogotá,

El tema del acceso de diversos sectores sociales a la emisión desde los medios, y el de la reforma estructural a los sistemas monopólicos o altamente concentrados de medios de comunicación aparecen como nuevos criterios para medir la democracia comunicacional. Las concepciones tradicionales de la libertad de prensa, como las de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que muchas veces se han confundido en la práctica con la libertad de empresa e incluso con la defensa de gobiernos autoritarios, o la de la libertad de prensa entendida como neoliberalización económica de las comunicaciones, están siendo cuestionadas o complementadas con criterios de pluralismo económico y de reforma estructural de los sistemas concentrados.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada por el Congreso Argentino en noviembre de 2009, prescribe que un 33% de los medios de comunicación estará en manos del sector privado-comercial, un 33% en manos del sector público-estatal y el restante 33% en manos del sector de medios comunitarios.

La ley argentina prescribe unos topes a la propiedad en cada sector y prohíbe los cruces de propiedad entre medios, y entre éstos y el sector industrial. Obliga a desconcentrar la propiedad a partir del 7 de diciembre de 2012.

---

2011; Denis de Moraes, *La cruzada de los medios en América Latina. Gobiernos progresistas y políticas de comunicación*, Paidós, Buenos Aires, 2011; Andrés Cañizalez (coordinador), *Tiempos de cambio. Política y comunicación en América Latina*, Konrad Adenauer Stiftung-ALAIC-Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2009

El gobierno de Cristina Kirchner recogió como uno de los insumos para el diseño de esta ley, las propuestas de 300 organizaciones sociales agrupadas en la “Coalición por una Radiodifusión Democrática”. Los 21 puntos propuestos por la Coalición han sido retomados a su vez por los impulsores de la aprobación de una nueva ley de medios en Ecuador.

En Ecuador, se ha creado Ecuador TV como canal público de televisión, producto de la incautación de un canal a los banqueros defalcadores de la economía. Tanto en Ecuador, como en Bolivia, la acción gubernamental ha estado orientada a la creación o al fortalecimiento de canales públicos culturales y educativos, los cuales o simplemente no existían, como en el caso ecuatoriano, o habían sido abandonados o descuidados por los gobiernos anteriores.

México ha iniciado recientemente, hace unas semanas, a partir de un acuerdo entre los tres principales partidos políticos (el PRI, el PAN, el PRD) suscrito a finales del 2012, un proceso de reforma al monopolio de Televisa y TV Azteca en televisión, y de Carlos Slim en telefonía celular, quien controla en ese país el 70% del mercado. Como vemos de este caso, no solamente los países del así llamado “socialismo del siglo XXI” encuentran inconveniente el estrecho matrimonio entre medios, sector financiero y grandes corporaciones económicas nacionales y globales. La preservación de un ordenamiento político y económico democrático depende de un sistema informativo pluralista en lo económico, lo político y lo cultural. Las distorsiones a la información que implica el monopolio de los medios por parte de los grandes conglomerados económicos y financieros intentan corregirse a través de medidas de regulación público-estatal, promovidas por gobiernos que



adoptan directrices posneoliberales o neo-desarrollistas.

Uno de los propósitos que anima estas reformas en América Latina es la promoción de vigorosos sistemas nacionales de medios públicos. Los retos a estos sistemas son muy grandes y su desarrollo futuro mostrará si fueron capaces de responder a ellos. De un lado, se trata de crear medios verdaderamente públicos y no simples medios gubernamentales que sean una mera caja de resonancia de las posiciones e ideologías de los gobernantes de turno. “Públicos” debe significar también unos medios capaces de expresar un amplio pluralismo de voces sociales, políticas y culturales, que amplíen y enriquezcan las perspectivas en la información y en la opinión sobre los problemas nacionales. El acceso por sí solo no basta, pues se necesita capacitar en destrezas técnicas y en aspectos conceptuales y de contenidos a los productores y realizadores de los nuevos espacios de emisión que se creen. “Medios públicos” supone además el desarrollo de propuestas de producción de ficción que den cabida a un amplio espectro de temas, contenidos, conceptos y estéticas, abordados desde estándares de calidad. El auspicio a colectivos y productores individuales independientes y la adopción de criterios y mecanismos de selección de las propuestas sobre la base de méritos y de procedimientos licitatorios igualmente meritocráticos, deberá nutrir esa concepción de los medios público-estatales para garantizar creatividad e innovación. Con respecto a sus funciones políticas, esos medios público-estatales deberán tener espacios para la expresión de la oposición y para ello se requiere promover simultáneamente una cultura política que reconozca sinceramente el valor del disenso y de la oposición, cosa nada fácil en nuestros países con sus desigualdades, exclusiones,

intolerancias y polarizaciones. Finalmente, hay que observar frente a estos procesos de construcción de criterios de lo público en la comunicación, que en América Latina, la cultura necesaria para construir medios verdaderamente públicos si bien puede y debe nutrirse de experiencias como las de la BBC británica, la norteamericana National Public Radio NPR, o el Public Broadcasting Service PBS, de Estados Unidos, en televisión, deberá apoyarse en sus propias experiencias nacionales, en sus mejores expresiones de ejercicio independiente y crítico del periodismo, en sus mejores tradiciones de libertad de prensa y pluralismo informativo y de manejo jurisprudencial de las mismas.

Colombia ha estado casi totalmente al margen de este proceso de democratización de las comunicaciones. Y digo “casi”, porque la excepción serían el manejo actual del canal público capitalino Canal Capital, bajo la dirección de Hollman Morris, recuperando el género de opinión televisiva o los programas “periodísticos”, totalmente descuidados en el país por el predominio de los intereses mercantiles en la televisión privada, y ciertos elementos de política antimonopólica en el actual manejo por el Ministerio de TICs y de las Comunicaciones, del proceso de adjudicación de la tecnología 4G en telefonía celular y transmisión de datos.

Miremos algunas de las razones que explican esa marginalidad de Colombia frente a estos procesos de democratización de las comunicaciones.

De un lado, asistimos desde 1998 a un proceso de privatización neoliberal de la televisión, el cual fue ambientado por un discurso público justificatorio de la misma con el argumento de que la digitalización o reconversión tecnológica de la televisión exigía

una inversión muy alta de capital que el Estado no podía asumir por lo que la privatización era la única salida. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Televisión CNTV, creada por la Constitución de 1991 para formular una política pública de televisión, terminó atrapada entre los intereses políticos clientelistas y los de los dos oligopolios de RCN Televisión y Caracol Televisión, y siendo incapaz de promover la democratización de la televisión. Los dos canales privados de televisión defendieron en los últimos años de manera acérrima su situación monopólica dentro del mercado del medio, impidiendo la entrada de un tercer canal de televisión, a través de acciones jurídicas promovidas por reconocidos abogados, apoderados de la defensa de los intereses de los canales. En el caso de la radio, sus representantes en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, adelantaron un intenso lobby con miras a que el medio quedara fuera de cualquier regulación, siendo exitosos en el logro de ese objetivo.

Habría que anotar también como otra de las causas de la excepcionalidad colombiana, el legado de los dos gobiernos de Uribe Vélez, en términos de derechización del país, de estigmatización sistemática de la izquierda, y de aislamiento con respecto a América Latina, sus tendencias políticas socialistas y progresistas, pero también en relación con sus experiencias en política social y de superación de la pobreza, como las de Lula, Correa o Chávez.

El sistema de medios, altamente concentrado, y durante los años del uribismo (2002-2010) muy subordinado al discurso derechista oficial, ha operado funcionalmente como una especie de preservador del “contagio” frente a las posibles influencias del socialismo del siglo XXI, manteniendo a la opinión colombiana aislada del

conocimiento de los aspectos positivos de esos gobiernos y sociedades. En esta línea ha jugado un claro papel RCN Televisión, sus informativos, y sobre todo el programa “La Noche” de Claudia Gurisatti con sus prácticas de unifuentismo (fuentes de un solo lado, generalmente representantes de los partidos Acción Democrática y COPEI, desplazados por el chavismo, o ex generales ligados a esos partidos exiliados en Miami), su antichavismo barato y de cruzada, y su ninguna reportería seria y medianamente equilibrada de la Venezuela de Chávez y de los países del socialismo del siglo XXI.

Hay que reconocer sin embargo, en medio de este panorama dominante de profundos sesgos ideológicos por parte del periodismo colombiano en el cubrimiento de estos procesos del vecindario latinoamericano, que ha habido un cierto cambio, por lo menos a nivel de la prensa escrita, que se hizo notorio el día de la reelección de Rafael Correa como presidente del Ecuador, y los días subsiguientes: un editorial muy elogioso de El Tiempo el mismo día de la reelección, con respecto a la política social de Correa y a sus logros en salud, educación, y en construcción de carreteras. Así mismo, un también elogioso artículo de opinión del economista y ex codirector del Banco de la República Salomón Kalmanovitz (2013), destacando el manejo macroeconómico en el vecino país y los logros sociales.

Pero en general, en cuanto a las políticas y leyes de medios, hay una reducción profundamente ideológica en la prensa escrita y en los medios masivos hegemónicos en Colombia, de estas iniciativas de reforma de los sistemas de medios actualmente en curso en América Latina, a supuestas “leyes mordaza”.



Desinformación, información con acentos descalificatorios marcadamente ideológicos o simplemente no información a la población sobre los contenidos de las leyes de medios aprobadas actualmente en Argentina y Ecuador, y en proceso de diseño en México, como también en otros países de la región, de cómo se discutieron, de las fuerzas y organizaciones sociales que han acompañado y promovido estas reformas, constituye la tónica dominante en los medios concentrados colombianos.

Una última y seria razón de esa excepcionalidad colombiana en medio del contexto latinoamericano de reforma estructural a los sistemas de medios, se relaciona con la debilidad estructural de la sociedad civil de la comunicación y de los medios, que hace que ni en el Congreso de la República ni en los partidos políticos, ni a nivel de las organizaciones y movimientos sociales, los temas de la democratización de las comunicaciones, sean en Colombia una bandera importante de lucha política y social.

## **II. Dos problemas estructurales de la comunicación pública en Colombia que podrían resolverse con un proceso de paz exitoso**

Pese a las positivas transformaciones que han ocurrido en la transición de Uribe Vélez a Santos, a favor de un régimen comunicativo menos tradicionalista, menos ideológico, menos hacendario, menos monológico, menos propagandístico y obsesivo con la negación del conflicto armado y con la idea de que la guerrilla estaría en “el fin del fin”, y no obstante la indudable restitución de un clima liberal-democrático y de menor pugnacidad y polarización en la comunicación con respecto al clima impuesto por el anterior gobierno, hay algunos problemas estructurales en el régimen comunicativo

colombiano que no se asocian solamente a los dos últimos gobiernos y que tienen que ver con la permanencia del conflicto y la manera como éste afecta la comunicación pública.

### **I. Conflicto armado y fortaleza de la propaganda y de las lógicas propagandísticas en la comunicación pública y la comunicación gubernamental**

Uno de los efectos del dilatado conflicto armado que ha vivido Colombia durante más de medio siglo, es la tendencia al manejo propagandístico de la información no sólo sobre el propio conflicto armado (en la atribución de la autoría de ataques o actos terroristas, número de afectados o de bajas al enemigo, etc.), sino también sobre actividades conexas como la política militar o el impacto de esta sobre la población civil.

No sobra recordar que la primera víctima en medio de un conflicto armado termina siendo la verdad informativa, frente a la cual los actores armados, incluidos los gubernamentales, van a querer torcerle el cuello, para favorecer de manera instrumental versiones favorables a sus respectivos intereses. Hay que precisar también en este punto que la propaganda como modalidad de comunicación no se corresponde con un orden político democrático y que históricamente se asocia más a regímenes de tipo soviético y a sistemas políticos fascistas. Por lo tanto, la propaganda constituye una forma de comunicación autoritaria y abusiva para con las audiencias y su derecho a tener versiones contrastadas y confiables de la realidad informativa.

Una de las expresiones de ese carácter instrumental que adquiere la comunicación pública y la comunicación gubernamental

en Colombia, es la permanencia a través de distintos períodos de gobierno de los discursos acerca de los militares como héroes. Estos han estado presentes en las propagandas de la Comisión Nacional de Televisión sobre los militares que pasaron por las pantallas de televisión durante muchos años; en la reiterada publicidad oficial en diferentes medios en torno a que “los héroes en Colombia sí existen”; en las piezas publicitarias institucionales presentadas durante los dos últimos años del gobierno Uribe con motivo del Bicentenario de la Independencia, sugiriendo una clara línea de continuidad entre la gesta emancipatoria de 1810-1819 y la lucha contemporánea contra las FARC (un uso abusivo y claramente instrumental de la historia), y en los comportamientos muchas veces rituales de los colombianos frente a los puestos militares en las carreteras, levantando sus dedos pulgares como signo de agradecimiento y solidaridad con ellos. Si bien en este último caso, en tal comportamiento de conductores y viajeros se expresa una indudable solidaridad de los colombianos frente al soldado raso que en lugares como La Línea, el puente de Cajamarca y otros, protegen la infraestructura de eventuales ataques guerrilleros, hay que tener en cuenta que en ese gesto de los colombianos en las vías se expresa muchas veces también una solidaridad mecánica y acrítica con los militares, alimentada por las modalidades de propaganda oficial que aquí analizamos.

La permanencia del conflicto armado interno coloca entonces al periodismo y a los medios de comunicación en una condición de instrumentos para las políticas oficiales de persuasión y de manipulación de masas ligadas a las necesidades de la guerra: crear sensaciones de que la confrontación militar se está definiendo a favor del Estado (el famoso “fin del fin” de la guerrilla o la nega-

ción de la existencia del conflicto armado a través de un recurrente dispositivo retórico durante los gobiernos de Uribe Vélez ), o generar climas psicológicos y de opinión que favorezcan la adopción de un fuero militar permisivo con las violaciones a los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública o de la Policía.

La paradoja y la problematicidad de todos estos dispositivos de producción y representación mediática de los militares como héroes es que esa misma institución es la responsable de casi tres mil desapariciones forzadas en el caso de los “falsos positivos”, y de alianzas expresas o tácitas y de omisiones y complicidades con decenas de masacres cometidas por los paramilitares (El Salado, Mapiripán, etcétera).

Comentando el reciente informe del Centro de Memoria Histórica sobre el conflicto armado colombiano en los últimos 50 años, una reseña crítica del mismo por la revista “Semana” destaca que

“particularmente inquietante”, dice el informe, es la responsabilidad de la fuerza pública. La institución encargada de proteger a los civiles, figura con presunta responsabilidad por 158 masacres con 870 víctimas, 2.340 asesinatos selectivos, 57 actos de sevicia y 182 ataques a bienes privados, sin contar la lista colosal de detenciones arbitrarias y torturas en tiempos del Estatuto de Seguridad o la desaparición forzada, que está por investigarse.

El informe increpa al Estado, que volvió la espalda a los dilemas y la violencia del campo, cerró los ojos al paramilitarismo mientras los militares lo promovían y tomó decisiones, o las omitió, que contribuyeron a la confrontación (Semana,



“Para poner a pensar a Colombia”, 2013: 36-37).

Tenemos que reconocer entonces, a la luz de la historia y del presente del conflicto armado colombiano, que esa comunicación propagandística no sólo crea ambientes favorables a la militarización de la sociedad, sino que impide una deliberación crítica y una rendición de cuentas claras a la sociedad por parte del estamento militar, sobre las políticas institucionales para garantizar una real seguridad de la población campesina, de los líderes de restitución de tierras, de los miembros de la Marcha Patriótica y de otras organizaciones políticas y sociales alternativas, y de los guerrilleros que se reincorporen a la vida civil y a la participación política legal a través del proceso de paz.

Las lógicas de propaganda han venido también haciendo carrera desde el sector privado, para ocultar o minimizar conflictos laborales, como en el caso de Pacific Rubiales, cuando inmediatamente después de fuertes conflictos que se tradujeron en disturbios en sus campos de explotación petrolera, desórdenes que fueron cubiertos profusamente por los noticieros de televisión, asistimos a una sistemática y desmedida publicidad en medios masivos (de tonos idílicos, con trabajadores y empleados radiantes de felicidad por trabajar en dicha empresa), a través de publisreportajes y patrocinios de eventos de distinta índole, incluido el de la selección Colombia de fútbol de mayores (Pardo, Daniel, 2012; Samper Pizano, 3 y 18 de noviembre 2012; Rodríguez Garavito, 24 septiembre y 29 de octubre de 2012). En el sector minero-energético estas lógicas de propaganda, aunadas a discursos de responsabilidad social empresarial, están sirviendo para encubrir todo tipo de abusos contra el medio ambiente y contra las poblaciones afectadas por esos

grandes proyectos de explotación minera. A nivel regional, en el caso del Tolima, hemos visto también cómo empresas como Anglo Gold Ashanti se posicionan y autolegitiman socialmente patrocinando al equipo de fútbol local, el Deportes Tolima y a través de otras estrategias de posicionamiento político y social (Rico, 2010).

**Propuesta al periodismo y a la sociedad:** Superación de las lógicas comunicativas de propaganda por abusivas para con la opinión pública. Propender por una información objetiva, equilibrada y plural, que dé cuenta de lo que efectivamente ocurre en el país en cuanto al conflicto armado y que preste especial atención a sectores descuidados históricamente por la información dominante, como los campesinos y los colonos.

Dado que la propaganda (llámense campañas de producción de héroes o propaganda de empresas minero-energéticas), oculta situaciones que para algunos sectores resulta mejor no discutir públicamente, se requiere desde la sociedad (maestros, asociaciones de televidentes, periodistas, intelectuales), dar pautas para una recepción crítica de los mensajes propagandísticos y para diferenciar entre políticas justas, auténticas y confiables de responsabilidad social-empresarial y discursos propagandísticos e instrumentales que ocultan intereses empresariales mezquinos o graves efectos de deterioro medio-ambiental que afectan a los ecosistemas y a los seres humanos y a otras especies que hacen parte de ellos.<sup>3</sup>

3 Aclaro que no se trata de descalificar a las empresas minero-energéticas, sino de ejercer un serio y sólido control ciudadano sobre sus políticas y el impacto de ellas sobre el medio ambiente y la sociedad.



Frente a los “empresarios-periodistas” (Pardo, 2012), que sacrifican la verdad informativa y su independencia periodística, en virtud de las utilidades económicas que reciben por sus silencios o sus aplausos a ciertas políticas, empresas o proyectos de desarrollo, trabajar en la formación de públicos de medios que no traguen entero y cuenten con elementos para ejercer una sanción moral y política frente a los medios fletados por los intereses comerciales, minero-energéticos u oligopólicos, muchos de los cuales suelen autopublicitarse pomposamente como “medios independientes”, estando muy lejos de serlo.

## **2. Conflicto armado, medios de comunicación y estigmatización de los movimientos sociales**

Una de las maneras como la permanencia del conflicto armado afecta la imagen de los movimientos sociales tiene que ver con la tendencia a la estigmatización o señalamiento de los movimientos sociales sobre la base del argumento que cualquier movilización de protesta, huelga o paro de relevancia nacional o regional, está supuestamente infiltrado por la guerrilla de las FARC. Las FARC terminan convirtiéndose en algo similar al Espíritu Santo que está en todas partes pero que nadie lo ve, en una información sin datos ni evidencias comprobables, muy definida por acentos y discursos marcadamente ideológicos.

Este argumento se volvió parte de la estrategia de los Ministros del Interior desde hace muchos años y a veces de los Ministros de Defensa, para descalificar a los movimientos sociales, muchas veces sin ninguna evidencia de la existencia real de ese tipo de relación (López de la Roche, 2002).

En el caso del movimiento indígena del Cauca que ha dado sobradas pruebas históricas de su actitud pacifista y crítica frente a los actores armados, incluidas las FARC, frente a las cuales han establecido claras distancias políticas y simbólicas, tanto los gobiernos de Uribe Vélez como el de Santos han recurrido a la descalificación de sus movilizaciones con el argumento de estar infiltrados por las FARC.

No estamos sugiriendo que el periodismo y los medios oculten las relaciones entre los movimientos sociales y las guerrillas en aquellos casos en que ellas existen. Lo que demandamos es información factual seria y comprobable, pero también responsabilidad social e interpretación compleja desde la titulación y los géneros editoriales y de opinión, de las distintas situaciones regionales de conflicto, las cuales tienen que ver con exclusiones históricas de regiones y poblaciones, responsabilidades estatales y gubernamentales por esas exclusiones, pero también con poblaciones que pueden ser base social de los grupos guerrilleros como también simples aliados coyunturales o forzados de la insurgencia.

La tácita prohibición del cubrimiento periodístico del conflicto armado en el campo colombiano fomentada entre el 2002 y el 2010 por el uribismo y acatada por los grandes medios de comunicación, (desafiada solamente por el periodista Hollman Morris y por algunos reporteros de medios internacionales que continuaron realizando la reportería del conflicto armado en zonas campesinas), facilitó y sigue facilitando la manipulación oficial de la información y su cómoda descalificación ideológica de los movimientos sociales que tienen lugar en las zonas rurales del país. No está de más recordar en este punto que las “Unidades de Paz” que habían sido creadas durante el



proceso de paz de Pastrana en diarios como “El Tiempo”, “El Espectador” y “El Colombiano”, con el propósito de cualificar el cubrimiento de los temas de la paz y el conflicto armado, van a desaparecer durante los años del uribismo, en virtud del triunfo del nuevo ciclo de guerra y del nuevo clima político belicista imperante.

En la coyuntura actual del paro campesino en la región del Catatumbo, antes que estigmatizar al movimiento campesino por la presencia de la guerrilla en la movilización, y en una coyuntura histórica de negociación gubernamental de paz con las FARC, en donde debieran estimularse actitudes de confianza entre las partes, el Estado y el gobierno Santos podrían hacer un esfuerzo para recomponer su legitimidad perdida a través de una vigorosa política de inversión social en esa región históricamente abandonada por las instituciones, e incluso dar paso a una especie de ensayo de una zona de reserva campesina (Ospina, 2013). Ceder a la presión del ministro de Defensa y a las voces de aquellos sectores que preferirían una solución del paro a través de la represión (aún reconociendo en este caso específico del Catatumbo la presencia de la guerrilla en medio de la movilización campesina), evidencia también las ambivalencias del gobierno Santos frente al proceso de paz, presionado por los militares, el uribismo y seguramente por intereses mineros y agroindustriales que ven como inconvenientes las zonas de reserva campesina (Bonilla, 2013).<sup>4</sup>

4 Véase la concisa y muy interesante descripción que hace el científico Julio Carrizosa Umaña (“Verdades del Catatumbo”), sobre la región, sus recursos naturales y su historia, para comprender todo lo que puede estar en juego en términos de intereses, en el actual

La descalificación por el presidente del movimiento por estar infiltrado por la guerrilla, no sólo lo inscribe en la vieja política de los grupos dirigentes colombianos de estigmatización de los movimientos campesinos, que en este artículo estamos cuestionando, sino que además, no se corresponde con los propósitos de la negociación de paz de La Habana (De la Torre, 2013), que se adelanta justamente para poder superar definitivamente este tipo de coexistencias ambiguas entre guerrillas y movimientos sociales. La descalificación del senador Jorge Robledo, acusándolo de ser el promotor de los paros y protestas de mineros y campesinos durante el mes de julio de 2013 (“Gobierno señala a instigadores de la violencia en paro”, 2013; “La ‘denuncia’ del presidente Santos”, 2013; Orozco, 2013), no sólo muestra la poca tolerancia del presidente con la única voz opositora de relevancia en el congreso, sino que deja una duda preocupante acerca de cómo se comportaría a futuro con una oposición mucho más amplia y sólida, con perspectivas de poder.

El manejo represivo inicial del paro por el gobierno, produciendo cuatro muertos de parte de los campesinos, nos parece indebido y cuestionable, y paradójicamente, le da argumentos a las FARC para insistir en la vigencia de las armas como instrumento legítimo de lucha social.<sup>5</sup> La policía y la fuerza pública en este tipo de protestas deben tener un especial cuidado con la vida de las personas. En esos escenarios se juegan también su propia legitimidad como institu-

conflicto por la definición de una política hacia la región.

5 Véase la argumentación de Jorge Torres Victoria, “Pablo Catatumbo”, en “‘Esos temas no están aún sobre la mesa’: Farc”, *El Espectador*, domingo 14 de julio de 2013, p.10

ción policial y militar frente a poblaciones históricamente excluidas y abandonadas por el Estado. Hay que anotar, adicionalmente, que esos cuatro campesinos muertos, le importaron casi nada a los medios de comunicación y al periodismo “nacionales” que no exploraron acerca de sus vidas, sus trabajos y sus familias.

La guerrilla de las FARC, de su lado, como si no estuviera haciendo parte de una mesa de conversaciones y negociaciones de paz, saca un comunicado políticamente torpe, si su interés es ganarse la opinión pública colombiana, donde expresa que los campesinos del Catatumbo “pueden contar con nuestras filas, con nuestras armas, con nuestros combatientes. Dispuestos a recibirlos, a apoyarlos, a conducirlos a la victoria final (“Impactos del Catatumbo”)”. ¿Siguen con el sueño de “la victoria final” o es sólo la inercia discursiva del maximalismo revolucionario? Cualquiera que sea la respuesta a esta pregunta, esas palabras constituyen signos equivocados si se quiere de verdad tener una opinión pública que respalde con fuerza y convicción el proceso de paz.

Como conclusión, mal manejo de la situación del paro campesino en el Catatumbo de parte del gobierno y de la guerrilla, lo que anticipa las tensiones y problemas que pueden venir a futuro con la puesta en marcha de las políticas de desarrollo rural durante el posconflicto.

**Preguntas:** ¿Le interesa a nuestra clase política y a los grupos dirigentes fomentar la organización de la gente para la lucha por sus derechos? O le interesa mantener unos rebaños de personas obedientes y sumisas a los abusos de los mal prestadores de salud y demás abusadores de los derechos en distintas esferas de la vida nacional? Creemos

que ésta no debe ser una preocupación solamente de la izquierda sino una preocupación de todos los demócratas de este país: formar ciudadanos conscientes de sus derechos como también de sus deberes participativos.

¿Del proceso de paz y de la superación del conflicto armado a través de la negociación no tendríamos que demandar a mediano plazo una sociedad menos indiferente y más activa en el ejercicio de su ciudadanía?

**Propuesta:** Tener un “control narrativo” desde los medios y los periodistas críticos sobre las declaraciones de presidentes, ministros y altos funcionarios del Estado que ritualmente desde sus discursos públicos estigmatizan injustamente a los movimientos sociales. Pedirles mayor responsabilidad con la palabra pública frente a imputaciones abusivas y apresuradas que en Colombia muchas veces constituyen una pena de muerte.

### **III. La comunicación para la paz y la necesidad de transformaciones en las subjetividades y las culturas políticas de los colombianos**

#### **I. De cómo evitar que la polarización y el miedo sean los decisores en las próximas elecciones**

La guerra no le permite en Colombia al debate público sino hablar de sí misma, por eso no nos permitimos hablar de otros temas más allá de la guerra, que debieran ser los temas claves de la discusión ciudadana. Los colombianos terminamos cada cuatro años eligiendo presidente sobre la base de campañas electorales donde el maniqueísmo y la polarización, con frecuencia inducidos, sobre la base del inculcamiento del MIEDO como factor central de la decisión



electoral, nos llevan a decidir sobre la base de opciones binarias, bipolares, ligadas a la guerra o a la paz, entendidas frecuentemente de manera simplista, a quien apoyar.

Los medios de comunicación a menudo favorecen, tal vez inconscientemente, ese tipo de comunicación y ese tipo de adhesiones políticas primarias, pues les encanta el escándalo, les da buen rating ese tipo de comunicación polarizadora.

Hay que quebrar ese círculo vicioso de la intolerancia y el miedo para poder construir una opinión pública capaz de formular una agenda seria de democratización política y social: la reforma de un sistema de salud que hoy agrade a nuestros padres y a nuestras familias; la superación de nuestros vergonzosos índices de desigualdad; la superación de la corrupción, el diseño de instituciones estatales eficaces y la formación de un funcionariado con un alto sentido de lo público; la defensa de los intereses nacionales frente a las empresas pirañas de la minería; la ausencia de una política seria de promoción de la educación superior pública.

Frente a la campaña electoral que se avecina, propongo a los medios de comunicación y al periodismo trabajar por darle una gran altura argumentativa y de ideas a los debates electorales y desarrollar un “control narrativo” de los mensajes publicitarios y de las propuestas y discursos políticos, que contribuya al debate serio de propuestas, que le reste espacio a la descalificación moral y personal del adversario, y que complejice la comprensión por parte de los ciudadanos y del electorado, de los dilemas de la paz y la confrontación armada en la actual coyuntura nacional. Superar la comunicación política orientada a que el elector sea el miedo, para que los colombianos puedan decidir sobre la base de un abanico amplio

de ideas y propuestas relacionadas con sus intereses y problemas fundamentales. Por supuesto, dentro de esos temas fundamentales tiene que tener un lugar importante más no el único, el tema de la paz y el de la confrontación armada, pero un buen manejo periodístico y mediático de los próximos debates electorales debería evitar que el enfrentamiento polarizante de verdades ideológicas termine uniformizando la opinión y la decisión electoral.

## **2. Trascender el modelo minimalista de los negociadores gubernamentales de que el modelo económico, el modelo social, el modelo minero o el modelo militar no son negociables**

Los negociadores gubernamentales, en parte debido a su comprensible afán de respetar la agenda acordada con las FARC e impedir que ella se cargue de todo lo divino y lo humano, pero también por la ausencia de una apuesta generosa de democratización política y social de parte del gobierno que representan, aparecen en su puesta en escena en la mesa de La Habana con un discurso defensivo, minimalista y a menudo poco generoso, frente a una guerrilla locuaz que apartada durante más de una década de los micrófonos y las cámaras estaría tratando de recuperar el tiempo perdido en su comunicación con la sociedad.

La insistencia repetitiva y defensiva de Humberto De la Calle en que el modelo económico, el modelo social, el modelo político y el modelo militar no se negocian, si bien puede enviar signos de tranquilidad a la derecha conservadora y al uribismo, a los militares más oficialistas, a los latifundistas y sectores empresariales partidarios del mantenimiento del actual status quo, produce frente a sectores democráticos y progresistas de la opinión pública y del pe-

riodismo y frente a sectores críticos y bien informados acerca de los problemas nacionales, la sensación de que de acuerdo con las posiciones de los voceros gubernamentales, en el país no habría que cambiar nada, que esos supuestos modelos estarían funcionando óptimamente y que Colombia sería hoy casi que un paraíso o “el mejor vivero del mundo”. Pero tal actitud puede dejar también la sensación en la opinión de que los negociadores gubernamentales “quieren sacarla barata”.

En un país que vive una crisis social gravísima de su sistema de salud, que sufre una inequidad social de las más altas del mundo, donde está ausente una política pública y una legislación que consulte ante todo los intereses nacionales frente a un sector minero-energético rapaz porque la legislación y los grupos políticos dirigentes se lo permiten, donde las élites políticas han demostrado su incapacidad para construir un proyecto de país (luego de rogar durante años por un TLC con EEUU descubren que no han construido las vías necesarias para sacar los productos a los puertos de salida), donde la corrupción campea y los grupos dominantes utilizan a menudo sus recursos económicos y sus redes de relaciones políticas y sociales para perpetuarse en el poder y para enriquecerse, resulta mezquina la constante reiteración por Humberto De la Calle de la idea de que “el modelo no se negocia”. Tal afirmación manda unos signos muy confusos para aquellos otros sectores sociales distintos de los privilegiados y le resta vuelo y trascendencia histórica y social a la negociación con las FARC, cuyos resultados antes que concebirse como concesiones indebidas a la guerrilla, podrían proyectarse y promoverse desde el discurso de los negociadores y desde el discurso presidencial como una oportunidad para la ampliación de relaciones de justicia y de-

mocratización con un impacto real sobre el conjunto de las relaciones sociales.

La crítica que aquí hacemos a la falta de una mayor proyección política y social de la negociación de paz con las FARC a través de una política social gubernamental que favorezca a amplios grupos sociales más allá de los tradicionalmente favorecidos por el poder, se corresponde con lo que han expresado y demandado muchos líderes populares, campesinos, indígenas y afrocolombianos que han participado en los dos foros por la paz organizados por Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia, por mandato de la mesa de La Habana, y es que el proceso de paz no puede circunscribirse a un pacto de cúpulas gubernamentales y guerrilleras.

Contrariamente al minimalismo de Humberto De la Calle, creo que la negociación de paz con las FARC tendría que abrirse paralelamente a un mayor diálogo con las demandas provenientes de amplios grupos de la sociedad, lo cual le daría una mayor legitimidad y respaldo ciudadanos. Tal proyección supondría desde el punto de vista comunicativo y de la mediación periodística, darle la voz a los distintos grupos que han estado excluidos de la posibilidad de ser escuchados en sus opiniones y demandas sociales, políticas y culturales, ampliar decididamente el espacio de lo decible alrededor del país que queremos.

Sin embargo, tenemos serias dudas sobre la posibilidad del gobierno de Juan Manuel Santos de trascender estrechos intereses de grupo o de clase social y fuertes afinidades personales con los privilegiados y con el estamento militar, para promover un nuevo orden social y político más justo y más pluralista, comprometido con el respeto a



la vida y los derechos humanos de todos los colombianos.

Algunos analistas hemos reconocido los importantes cambios ocurridos en la cultura política bajo Santos frente al modelo hacendario y monológico del anterior gobierno (López de la Roche, 2012); le valoramos además, el reconocimiento franco de la existencia del conflicto armado en el país y los esfuerzos para reconocer los derechos de las víctimas a través de la aprobación de la Ley de Víctimas y de la Ley de Tierras. Pero de otro lado, nos preocupan sus incongruencias y bandazos cuando termina haciéndole concesiones a los militares a través de un fuero militar extendido que ya empieza a tratar con indulgencia las desapariciones forzadas o “falsos positivos” (Uprimny, 2013), o cuando plantea torpemente y en contravía de los intereses nacionales y de todas las evidencias sobre la permanencia de graves situaciones humanitarias en el país (70 asesinatos sistemáticos contra líderes de restitución de tierras, control de territorios por bandas criminales o neoparamilitares en Urabá, la Costa Pacífica y en ciudades como Medellín), la salida de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (Rodríguez Garavito, 2013; Uprimny, 2013; “No hay por qué temerle a la ONU”, 2013). En esa línea de análisis, una reconocida columnista ha planteado que “el mando civil sobre las fuerzas militares es débil y por eso cuando la Oficina de la ONU pidió investigar si a cuatro campesinos en el Catatumbo los mataron balas de la Fuerza Pública, el Gobierno salió a recortarle su estadía en el país (Ronderos, 2013)”.

En cuanto a la política económica y a la política rural aparece también la esquizofrenia gubernamental, pues Juan Manuel Santos el promotor de la Ley de Restitución de

Tierras y cuyos voceros gubernamentales en la Mesa de La Habana pactan con los voceros de las FARC unas Zonas de Reserva Campesina y formas de tenencia de la tierra que protejan al pequeño propietario y a las economías campesinas de la voracidad latifundista y de la de la agroindustria de los combustibles o de la palma aceitera, de otro lado aparece también con la otra faceta de cercano amigo del embajador ante los EEUU Carlos Urrutia, quien con su oficina de recursivos y sofisticados abogados Brigard Urrutia, le hace astutos esguinces a la ley para favorecer la apropiación de 40.000 hectáreas de baldíos en el Vichada por parte de la empresa azucarera Riopaila. Que el hoy ex embajador Urrutia sea su amigo no es el problema, sino que el presidente esté dispuesto a hacer pasar un proyecto de ley que haga que ese tipo de apropiaciones de baldíos por parte de los poderosos, en perjuicio de los campesinos a quienes colocarían en calidad de peones o de desterrados, se puedan ahora hacer legalmente.

Es importante en este punto tener en cuenta lo anotado por Paula Rangel, investigadora de Dejusticia, quien ha destacado que la Corte Constitucional haya tumbado en su sentencia C 644 de 2012, la propuesta de reforma de tres artículos de la Ley 160 de 1994, presentada por el gobierno Santos y aprobada por el Congreso en el Plan de Desarrollo de 2012, para permitir que las empresas pudieran comprarle a los campesinos los baldíos adjudicados a ellos por el Estado:

La decisión de la Corte fue un “no” rotundo. En la sentencia C 644 de 2012 el organismo dijo que la reforma era un retroceso injustificado en el derecho de los campesinos de acceder progresivamente a la tierra. Para ella, el Estado tuvo una preferencia desbordada con las empre-

sas y le dio una bajísima protección a los campesinos. Entonces, no se pueden cambiar las condiciones de la ley de 1994 si no es necesario y ofrece buenas alternativas para los campesinos.

Además, la Corte criticó que la propiedad de las tierras termine en manos de empresas y que los campesinos queden destinados a ser simples asociados o vendedores. Con razón, la Corte se preguntó: “¿no pueden los campesinos ser incluidos dentro de la cadena productiva mediante el aporte de su fuerza de trabajo, su conocimiento e incluso sus parcelas sin necesidad de desprenderse del derecho de dominio? ¿Qué exigió el Estado a favor de la población campesina por parte de las empresas agroindustriales?” Como no encontró respuesta, declaró inconstitucional la reforma (Rangel Garzón, 2013).

A la luz de estos argumentos y evidencias, nos sentimos en el derecho y la obligación de preguntarnos hasta qué punto difiere la concepción del desarrollo del agro de Juan Manuel Santos, de la que inspiró los proyectos de Carimagua y los subsidios millonarios de Agro Ingreso Seguro (AIS) otorgados por el ex ministro Andrés Felipe Arias bajo el gobierno de Uribe a familias pudientes de la Costa Atlántica y de otras regiones del país. ¿Se trata del mismo modelo de gobierno “pro-rico” (Iturralde, 2009), el uno en una variante más hacendaria, familista y proparamilitar, y el otro en una modalidad más moderna, cosmopolita y sofisticada jurídicamente? Y en el fondo, ¿de dos modelos qué solo ven la generación de riqueza económica y social del lado del capital y que invisibilizan los aportes provenientes del mundo del trabajo?

En cuanto a la ausencia de políticas sociales paralelas a la negociación de paz, que si existieran podrían contribuir a fortalecer la credibilidad del proceso de paz enmarcado en un esfuerzo democratizador mayor, quiero referirme brevemente al tema de la educación superior y su relación con la paz. Como profesor universitario, académico y trabajador de la educación debo expresar la profunda inconformidad que sentimos en las universidades públicas como también en muchas de las privadas, cuyos estudiantes y profesores se solidarizaron también con la movilización estudiantil de octubre y noviembre de 2011, con la no respuesta por parte del gobierno Santos a las necesidades de financiación de la educación superior pública. Mientras en países como Brasil los estudiantes de maestrías y doctorados en un 90% cuentan con becas que les permiten dedicarse 100% a sus estudios, en nuestras universidades públicas la gran mayoría de doctorandos y estudiantes de maestría, no solamente no cuentan con becas que les permitan consagrarse integralmente a sus estudios e investigaciones, y hacer un doctorado seriamente, con total dedicación, como debe ser, sino que tienen que trabajar para pagar, en un sistema ya semiprivatizado a nivel de todo el sistema universitario público colombiano, matrículas entre 4 y 6 millones, de difícil pago para los estratos 1 al 4. Otra grave inequidad tiene que ver con que mientras a las universidades públicas se les ha venido exigiendo ampliación de la oferta y de la matrícula universitaria, y ellas han venido creando nuevos y numerosos programas de maestría y doctorado, necesarios y valiosos desde el punto de vista social y del conocimiento, ese crecimiento de programas no ha sido acompañado de una ampliación de la planta de docentes e investigadores, la cual se encuentra congelada desde hace 20 años. Tal situación se traduce en sobrecargas para los profesores



debidas al aumento de tareas, de tiempo y de funciones del trabajo docente, de administración académica y de investigación, que están afectando la calidad de la oferta educativa y de los propios procesos de investigación en las universidades públicas. Otra de las necesidades más sentidas de inversión, desoída por el actual gobierno, es la de recuperación de buena parte de los edificios de valor patrimonial del campus de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, herencia material y simbólica de la nación y de las contribuciones de la República Liberal (1930-1946) a la modernización y a la construcción de Estado-Nación, actualmente deteriorados por la ausencia de presupuesto para su conservación y restauración.

A casi ya dos años de la impresionante movilización estudiantil de octubre y noviembre de 2011 que le propinó un fuerte golpe simbólico a la administración Santos obligándolo a echar para atrás su reforma a la Ley 30, no hay una respuesta seria de parte del gobierno y del Ministerio de Educación, a éstas y a otras demandas de estudiantes y profesores de las universidades públicas.

**Pregunta:** ¿A la administración Santos le preocupa o le es indiferente haber perdido el respaldo de buena parte del estudiantado y del profesorado, constitutivos de lo que algunos denominan la “masa crítica” de la sociedad?

**Propuestas:** Terminando este apartado podríamos decir que requerimos un proceso de paz con mayor generosidad de parte de quienes lo orientan del lado gubernamental y estatal. Un proceso de paz que se relacione al mismo tiempo con un proyecto de autotransformación de los grupos dirigentes hacia una mayor capacidad de respuesta a

las demandas sociales y de políticas públicas más urgentes de los colombianos<sup>6</sup>.

Hay que ponerle pueblo y ponerle sociedad activa, participante y demandante al proceso de paz. La negociación tiene que ser también con la sociedad y no sólo con las FARC.

### 3. La desmilitarización de la cultura política de la derecha y de la izquierda

El proceso de negociación de paz y la superación del conflicto armado deben conducirnos progresivamente a una desmilitarización de la cultura política tanto de la derecha como de la izquierda.

Ya nos hemos referido arriba a la necesidad de desmontar la propaganda gubernamental de los militares como héroes para ojalá poder construir en el posconflicto un régimen comunicativo respetuoso con las audiencias y con la verdad informativa, democrático y competitivo en la posibilidad de contrastar una amplia diversidad de informaciones, interpretaciones y opiniones sobre los sucesos nacionales e internacionales.

En investigaciones anteriores sobre la cultura política de la izquierda (López de la Roche, 1994) he utilizado el concepto de “encapsulamiento” del politólogo español Rafael del Águila Tejerina, empleado por

6 Hay que decir en este punto que esta exigencia vale no sólo para los grupos dirigentes tradicionales, sino también para los nuevos como los progresistas de Gustavo Petro en la capital, que al igual que el gobierno de Santos tienen que mostrar mayor eficacia en la gestión pública, y mayor capacidad de ejecución y de respuesta oportuna a las demandas ciudadanas.



él en el análisis de los grupos clandestinos de oposición al franquismo, para referirme críticamente a ciertas actitudes, prácticas y visiones del mundo, propias de las izquierdas armadas colombianas. Del Águila observa que

“la clandestinidad producía un cierto encapsulamiento y una falta de comunicación con la sociedad en su conjunto, probablemente inevitable pero que tenía como consecuencia comportamientos políticos ritualistas, llenos de sobreentendidos, de claves ocultas, de sentimientos de grupo cerrado y portador de la única libertad/verdad posible, etcétera” (Del Águila, 1987: 26-27)

Quiero utilizar esta vez el concepto de “encapsulamiento” en un sentido ampliado al análisis de otros actores sociales y políticos, pues me parece útil para subrayar la fragmentación de la sociedad colombiana y el hecho de cómo varios de sus grupos y actores colectivos funcionan con sus propios sistemas de referencias y de valores, concebidos como verdades incontrovertibles, sin preocuparse por cotejar esas representaciones y creencias con las de otros sectores de la sociedad.

Me parece por ejemplo, que los militares colombianos adolecen en medio de su inmersión en el conflicto armado colombiano y de su espíritu de cuerpo, de un encapsulamiento similar. Sus referencias defensivas y rutinarias al “síndrome de la Procuraduría” en décadas anteriores, y en los años más recientes, a supuestas “guerras jurídicas” de las cuales serían objeto como institución de parte del poder judicial y de las instituciones de control, aliadas supuestamente a la subversión, así como sus resistencias al acatamiento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por

parte de algunos de sus sectores<sup>7</sup>, dejan ver actitudes y comportamientos refractarios a la crítica, a la rendición de cuentas franca a la sociedad, y a la visión autocrítica de los aspectos problemáticos de su participación en el conflicto armado (falsos positivos, articulación con los grupos paramilitares, participación en masacres, etcétera)<sup>8</sup>. La posición de la Asociación de

7 Como analistas sociales nos llama mucho la atención porqué, si como dice el comandante de las Fuerzas Militares, general Alejandro Navas, en una reciente entrevista, “El respeto por los derechos humanos y el DIH ha sido un norte trazado en nuestras Fuerzas Militares y hemos llegado a obtener suficiente madurez y responsabilidad en su cabal cumplimiento (Arrázola, 2013)”, ocurren entonces a su interior delitos tan graves como las desapariciones forzadas o “falsos positivos”, con todo lo que implican en términos de deterioro ético de parte de los miembros de su institución? Casos como los de los 27 soldados contraguerrilla de Riohacha, destituidos por no realizar un falso positivo (“Cuando ser bueno era malo”, 2013), tendrían que suscitar necesarias y profundas autocríticas y rectificaciones institucionales.

8 En el periódico “Las Fuerzas”, del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, No. 24 (julio-agosto de 2013, p. 3) aparece una nota titulada “Por los heridos en combate: fiesta patria en centros comerciales”, donde la Asociación Madres Protectoras del Soldado invita a participar en la celebración del 20 de julio, Día de la Independencia Nacional, en tres centros comerciales de Bogotá. El pie de foto que subyace a una de las tres fotografías que acompañan la nota de prensa, dice así: “Lleva un soldado en tu corazón” es el nombre de la campaña realizada por la Asociación Damas Protectoras del Soldado, ideada para recaudar fondos en beneficio de los héroes”. Si bien es respetable la preocupación por los suyos y por sus víctimas del conflicto armado, me llama la atención que los propios militares terminen creyéndose el discurso acerca de sí mismos como los héroes



Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares ACORE apoyando “que la ONU se vaya”, luego del pronunciamiento del presidente Santos en julio de 2013 en términos de que ya no se haría necesaria la presencia de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, deja ver las dificultades de los militares para asimilar la globalización jurídica de los derechos humanos (“ ‘No hay porqué temerle a la ONU’...”). Su crítica de que supuestamente los funcionarios de las Naciones Unidas “se identificaron con las organizaciones de extrema izquierda”, y que “perdieron toda credibilidad”, pues “no son creíbles para nosotros ni para el pueblo colombiano (Ibidem)”, no sólo resulta una visión parcializada e ideológica, sino que se parece, curiosamente, a ciertas visiones conspirativas, instrumentales y similarmente ideológicas de las instituciones, propias de la insurgencia de las FARC, a las cuales nos referiremos más adelante. Afirmar que las instituciones humanitarias de Naciones Unidas “no son creíbles para nosotros ni para el pueblo colombiano”, es poner desde un deseo ciego y sesgado, un signo de igualdad entre las opiniones de los militares y las del pueblo colombiano, como si sus posiciones al respecto fueran necesariamente coincidentes.

La otra cara del militarismo colombiano es la relacionada con un militarismo de izquierdas, poco tematizado analíticamente en nuestros medios de comunicación (si bien hay una importante elaboración intelectual sobre el tema en la bibliografía sobre la izquierda), y mucho menos a nivel de la propia izquierda, la cual carece de

---

y que éste sea un estimulante adicional de su cerrado espíritu de cuerpo y de su actitud refractaria a la crítica de parte de la sociedad.

una esfera pública y de unos medios masivos propios a nivel nacional donde revisar autocríticamente su cultura política.<sup>9</sup> Ese militarismo dentro de la tradición militar de izquierda ha estado en los grupos guerrilleros desde los 50 y los 60, con herencias de la revolución soviética, china y cubana, pero también de la propia tradición guerrillera colombiana, experimentando en las tres últimas décadas una degradación con respecto al ideario revolucionario inicial del “hombre nuevo”, estimulado por la revolución cubana y por la figura mítica del “Ché”: las relaciones con el narcotráfico, la proliferación del secuestro guerrillero como modalidad de financiación, la propia degradación ética y humanitaria del conflicto colombiano por los abusos de los distintos bandos, terminaron sacando a la luz las peores facetas de ese militarismo revolucionario empantanado en el autoritarismo y en un profundo relativismo ético cercano en muchas ocasiones al todo vale.

Ese militarismo de izquierdas y el culto izquierdista de la figura del comandante, también han estado presentes en algunos sindicatos, movimientos sociales y universidades públicas, en donde por ejemplo, la figura del padre Camilo Torres-guerrillero, termina a menudo en los graffitis y la iconografía de algunos grupos estudiantiles,

9 La izquierda no tiene en Colombia medios de comunicación propios donde pueda tematizarse y discutirse a sí misma: donde divulgar sus aportes históricos a la democratización del país, donde adelantar una autocrítica por la corrupción durante la gestión del alcalde Samuel Moreno en Bogotá, o una evaluación objetiva, por ejemplo, de si la existencia de la guerrilla en la historia colombiana ha contribuido a la conformación de una sociedad más organizada y más democrática o a reforzar las formas tradicionales de la dominación y la exclusión.

invisibilizando y opacando al Camilo Torres entusiasta organizador académico y comunitario, al Camilo Torres rumbero y carismático, o al Camilo Torres sociólogo rural, estudioso de la Violencia, de la vida campesina, pero también de las escuelas radiofónicas de Sutatenza<sup>10</sup>.

En el caso de las FARC, durante los años de la negociación del Caguán (1999-2002), su soberbia y arrogancia militaristas, ligadas a una torpe reivindicación pública del secuestro como “impuesto social” y a su incapacidad de hacerle a la sociedad propuestas políticas seductoras y viables, contando en ese momento con un acceso importante a medios de comunicación, contribuyó sustancialmente a conducir a la opinión pública colombiana a los brazos de Álvaro Uribe Vélez en las elecciones presidenciales de 2002, y a que el presidente durante sus ocho años de gobierno, a través de un discurso público reiterado de odio y confrontación, convirtiera a las FARC en el enemigo público # 1 de los colombianos. Este hecho tuvo un hondo calado en la conciencia de los colombianos, y constituye hoy uno de los más profundos obstáculos subjetivos a la aclimatación de una actitud de

respaldo ciudadano al proceso de paz de La Habana<sup>11</sup>.

#### **4. La comunicación y la “puesta en escena” de las FARC en la mesa de negociación**

De un artículo de Henry Robinson (2013), ex militante del Ejército Revolucionario Irlandés (IRA), sobre la posición y la manera como aparecen los líderes de las FARC en la mesa de negociación, del cual no comparto algunas tesis, rescato sin embargo su crítica a la “puesta en escena” de las FARC en la mesa de La Habana. El irlandés les dice a “Iván Márquez” y a sus compañeros de la guerrilla que aparecer públicamente con las camisetas con las fotos de sus compañeros muertos como expresión de luto y de recordación pero también de beligerancia revolucionaria (con las imágenes de “Raúl Reyes” y de Jacobo Arango, un ex combatiente amigo de Iván Márquez, muerto a comienzos de 2013), si bien es respetable desde el punto de vista de sus sentimientos, envía un mensaje problemático con esos “mensajes en código, no muy ingeniosos, al otro bando de colombianos en las conversaciones de paz”. El ex combatiente del IRA cuestiona ante todo, como inconveniente para el avance del proceso de paz, el mensaje presente en esas actitudes y esas imágenes, de vigencia de la revolución armada. Si bien Robinson no dice nada sobre el asunto de los retos comunicativos que estarían teniendo que afrontar las FARC, por la necesidad de comunicarse en dos canales, con dos destinatarios, de un lado, por la necesidad de mandar unos mensajes

10 Debo esta idea a la discusión con un pequeño grupo de colegas y amigos, de un capítulo de la investigación inédita del profesor Jaime Eduardo Jaramillo sobre el estudiantado de la Universidad Nacional durante los años 60, y a mi propia lectura con propósitos de docencia, del trabajo de Camilo Torres Restrepo con Berta Corredor Rodríguez, *Las Escuelas Radiofónicas de Sutatenza – Colombia. Evaluación sociológica de los resultados*, Centro de Investigaciones Sociales - Oficina Internacional de Investigaciones Sociales de FERES, Bogotá, 1961

11 Esta tesis se desarrolla más ampliamente en López de la Roche, Fabio, “Discurso presidencial y noticieros de T.V. (2002-2010) La reorientación afectiva de la nación”, *Revista Javeriana*, Bogotá, marzo de 2010



de dignidad y resistencia en la negociación a sus propias tropas guerrilleras, y de otro, por la exigencia de enviar unos signos claros a la amplia opinión pública colombiana, desarrollando el argumento del irlandés, creo que los voceros de las FARC no han reflexionado sobre lo problemáticas, y seguramente dolorosas y agresivas, que resultan esas imágenes para la inmensa mayoría de los televidentes, por lo que ellas significan y por los actos a los cuales se asocian en la memoria de los colombianos (tomas y destrucciones violentas de pueblos, declaraciones agresivas defendiendo el secuestro como instrumento legítimo de financiación y de lucha política, reclutamiento forzado de niños y adolescentes, etcétera).

En este punto tendríamos que subrayar el lentísimo y difícil descubrimiento de la comunicación y de la opinión pública por parte de la insurgencia de las FARC. No les ha ayudado a lograrlo pensar, como lo expresaban durante el Caguán, que la comunicación era la única guerra que no habían podido ganar. Con un pensamiento tan instrumental y tan funcionalista sobre la comunicación, difícilmente van a poder manejar la comunicación y los medios con inteligencia, asertividad y retroalimentación. Su visión instrumental de la comunicación es muy similar a la visión típica de los militares, no sólo en Colombia sino en muchos países del mundo, concibiendo con frecuencia la comunicación como “operaciones psicológicas” vistas de manera muy unilateral (énfasis en los efectos ideológicos deseados, prioridad al mensaje y al significado construido por el emisor, por encima del mundo y los sentidos del receptor y de una consideración seria y compleja del proceso de la recepción de los mensajes).

Sobre este punto y volviendo a la “puesta en escena” criticada por Robinson, sería

importante que los voceros de las FARC tuvieran en cuenta que la comunicación tiene que ver no sólo con los mensajes que queremos transmitir a otros grupos sociales de manera instrumental y persuasiva, sino también con el desarrollo de una capacidad de indagar y darnos cuenta cómo somos percibidos por los otros.

Si bien es respetable y comprensible una comunicación orientada a su militancia, las FARC tendrían que empezar a hablarle al grueso de la sociedad colombiana, a las inquietudes, cuestionamientos, desconfianzas, rabias y dolores que numerosos sectores de colombianos tienen frente a esta organización (algunos tienen también odios irracionales y actitudes viscerales de descalificación, inculcadas por los odiadores profesionales que ha producido el conflicto, a los cuales también tendrían que saber responder con inteligencia, argumentos e ideas y no sólo con fáciles y rígidas respuestas ideológicas).

Estoy de acuerdo también con quienes piensan que los dirigentes de las FARC tienen que pedir perdón a sus víctimas, pero que una expresión de ese tipo no puede provenir de presiones de los negociadores gubernamentales o del presidente Santos, sino de una propia reflexión y de una propia convicción sobre la necesidad de reparar, al menos simbólicamente,<sup>12</sup> a sus víctimas.

12 Uso la expresión “simbólicamente” no en el sentido de algo opuesto a lo real y a lo material, como a veces se usa la expresión en el lenguaje cotidiano, incluso en un sentido peyorativo (“eso es meramente simbólico”), sino en la acepción totalmente contraria: dándole una altísima significación a “lo simbólico”, como capacidad de destacar el sentido y la significación que adquiere una actitud, un

Sin esa convicción sincera y auténtica de parte suya, y simultáneamente, de parte de los otros perpetradores en el conflicto colombiano, que tiene que ver con profundas reflexiones humanas y existenciales de tipo personal, pero también colectivo, no va a haber paz ni una auténtica reconciliación nacional.

La sociedad colombiana, en la que muchas víctimas de la violencia de muy distintas clases y estratos sociales han dado muestras fehacientes de su generosidad y su capacidad de perdón, apreciaría todos los gestos de autocrítica, de reparación simbólica y discursiva a sus víctimas y de solicitud de perdón, provenientes de los dirigentes de las FARC. Pero esto tiene que ser el resultado de un proceso propio, sentido y auténtico, y no de un ultimátum a dicha organización. El logro de esa convicción y su expresión seguramente tienen sus ritmos propios de maduración.

El otro elemento importante de la crítica de Robinson a la puesta en escena de las FARC en la mesa de La Habana, y que personalmente comparto, es que deben dejar de mirar al pasado y construir un discurso que mire hacia el futuro. Por más cruda que sea esta crítica, el irlandés tiene toda la razón. Hace unos meses tuvimos oportunidad de ver una película que estaba en la cartelera cinematográfica, nominada como mejor película extranjera en los Óscars, la cinta “No”, del director chileno Pablo Larraín, dedicada a recrear la coyuntura histórica de las campañas por el “sí” o el “no” en el referéndum que tuvo que hacer el dictador Augusto Pinochet en 1988, presionado por la comunidad internacional, para decidir su permanencia en el poder. La his-

---

hecho, un pronunciamiento, en la vida social y cultural de una comunidad.

toria gira alrededor de las conversaciones, contradicciones y tensiones entre la visión conceptual del publicista René Saavedra, el cual es contratado por la campaña del “No” para orientar el desarrollo de la misma, y la concepción de los intelectuales, dirigentes políticos y militantes de los partidos de izquierda, participantes en la organización de la campaña por el “No”. Básicamente, la contradicción se desarrolla entre el concepto de Saavedra, el que después de muchas discusiones y tensiones finalmente se impondrá, de una campaña orientada a mostrar con fe, alegría y optimismo un horizonte de futuro posible en democracia para todos los chilenos, en diálogo con jingles y estéticas comerciales y contemporáneas sintonizadas con la cultura juvenil y la vida urbana, y la visión marcadamente racionalista de los militantes y dirigentes de la izquierda política, partidarios de una campaña denunciante de la violencia y la represión de la dictadura, orientada hacia el pasado y visual y conceptualmente triste.

Cuando vi la película, salí de la sala de cine pensando que este film deberían verlo los voceros de las FARC en la mesa de negociación, pero también muchos de los militantes de nuestros grupos y partidos de izquierda, que siguen anclados aún en nuestros días a visiones instrumentales, tristes y denunciistas<sup>13</sup> de la comunicación.<sup>14</sup>

13 Con esta afirmación no pretendo decir que la denuncia no sea necesaria cuando el momento y las circunstancias así lo exigen. El problema de la comunicación denunciante es que a menudo en ella la denuncia se vuelve un *desiderátum*, una pauta programática, un deber ser. Y se descuida todo el horizonte de construcción a futuro, de desarrollo de un proyecto social, político y cultural.

14 A los días de haber visto la película, un amigo me comentó que León Valencia había sugeri-



Las FARC, como ha sucedido con todas las otras organizaciones que han vivido procesos de reincorporación a la vida civil, y ellas no serían la excepción en caso de darse ese proceso, van a tener que revisar muchas de sus concepciones políticas, de sus interpretaciones del país y de la sociedad colombiana y sus instituciones. Los viejos esquemas ideológicos del marxismo soviético o de otros marxismos ortodoxos y anquilosados no sirven hoy para pensar la sociedad. Lo cual no significa que el marxismo como una entre varias interpretaciones de lo social (más no como la única, y mucho menos como verdad) no pueda contribuir a comprenderla.

Algunas posiciones y argumentaciones de los voceros de las FARC en la mesa de negociaciones repiten viejas visiones totalizantes, monolíticas y clasistas del Estado, las instituciones y del sistema de justicia con las cuales no se puede comprender la complejidad de la institucionalidad y de la vida colombiana, donde si bien se producen algunas apropiaciones clasistas de las instituciones o de las políticas públicas (y en este artículo nos hemos referido a algunas de ellas), no necesariamente esa lógica se extiende al conjunto de la sociedad y de todas y cada una de las instituciones estatales. A comienzos de mayo de 2013 en una declaración pública al cierre de la 8ª. Ronda de Conversaciones de La Habana, Iván Márquez leyó un comunicado donde las FARC expresaron de la siguiente manera las razones por las cuales no están dispuestas a someterse a la justicia colombiana:

---

do en un reciente artículo en su columna de la revista "Semana", a los líderes de las FARC, ver la película de Larraín. Leí el artículo de Valencia (2013) y compartimos la misma visión y la misma sugerencia a las FARC y a las izquierdas.

"Cualquier error que se hubiese cometido en desarrollo del conflicto y de la resistencia armada a la que nos ha obligado el terror de las élites en el poder, estamos dispuestos a revisarlo en función de la reconciliación. Pero ninguna autoridad moral tienen los victimarios y sus tribunales para juzgarnos ("Las FARC, dispuestas a revisar "errores" ...", 2013...)"

Ante esa visión estrechamente clasista del poder judicial habría que recordarles que esa justicia que vilipendian supuestamente por corresponder a estrechos intereses de clase, es la que ha procesado, juzgado y encarcelado a más de medio centenar de parlamentarios vinculados a la parapolítica, y la que impidió la segunda reelección de Uribe Vélez, no obstante la abrumadora popularidad del líder populista de derechas entre la población colombiana.

El discurso de los "errores" que se habrían cometido "en desarrollo del conflicto y de la resistencia armada a la que nos ha obligado el terror de las élites en el poder", no sólo resulta minimizador y autoindulgente frente a los delitos, crímenes y abusos de las FARC contra la población civil, sino que transfiere cómodamente parte de su parte de responsabilidad en el conflicto a las elites políticas.

La nota del periódico mexicano destaca también sobre el mismo pronunciamiento de Iván Márquez que

"Sobre la sugerencia de algunos medios colombianos de que las FARC pidan perdón por los daños derivados del conflicto armado, las FARC afirmaron que esa actitud equivale al "cálculo de la perfidia para ocultar a los verdaderos victimarios.

“Perdón debe implorar un Estado que ha suprimido tantos seres humanos de manera desalmada con su política económica”, puntualizó”.

Ese discurso público de no aceptar o de aceptar a medias, con eufemismos como el de “errores”, sus responsabilidades por violaciones a los derechos humanos y de reiterar que los victimarios son fundamentalmente los otros, el enemigo, las instituciones, los militares, las elites dirigentes, la burguesía, etc, genera un profundo rechazo en amplios círculos de opinión (Samper, María Elvira, 2013<sup>15</sup>) y refuerza el odio y la animadversión de los millones de enemigos viscerales de las FARC en el país.

### **Eventuales impactos de una negociación de paz exitosa con las FARC sobre los movimientos sociales, la izquierda y las organizaciones políticas alternativas**

Dadas las complejas circunstancias colombianas, con un conflicto que ha dejado tantas víctimas, dolores y deseos de venganza y que ha incubado tantos odios e intolerancias, es difícil esperar un desarrollo del posconflicto sin traumatismos y tensiones. Estamos lejos de pensar que ese período va a ser un camino de rosas.

Sin embargo, podría ser una oportunidad para renovar la vida política colombiana

15 Esta columna de opinión producida en los días siguientes a la declaración de las FARC que aquí analizamos, en sí misma, refleja la reacción de periodistas cualificados y formadores de opinión reconocidamente ecuánimes, que no tienen nada que ver con los columnistas atizadores del odio y de la intolerancia, ante este tipo de declaraciones públicas de las FARC.

generando un nuevo pacto político menos excluyente y más tolerante con el opositor y con el que piensa diferente.

Superada la confrontación armada, los movimientos sociales podrían desarrollarse probablemente con menos estigmatizaciones y con mayores garantías para la vida y la seguridad personal de sus miembros y sus líderes.

El sindicalismo, profundamente victimizado en las décadas precedentes y afectado y diezmado por la violencia oficial y por la paramilitar que han conducido a situaciones como las de hoy donde casi nadie quiere asumir en un sindicato una secretaría de derechos humanos por lo que ello implica en términos de riesgos para la vida y la seguridad personal, podría contar seguramente con unas mayores garantías para la defensa y desarrollo del derecho de asociación.

La izquierda política, estigmatizada sistemáticamente los ocho años del uribismo, durante los cuales se revivieron viejos climas políticos y culturales de anticomunismo, de tradicionalismo premoderno y conservador, podría tal vez en las nuevas circunstancias derivadas de la paz, intentar superar su actual fragmentación, para relanzar un proyecto político y cultural renovado que contribuya a la modernización y democratización del país, no solamente desde la oposición.

Todas estas vertientes del movimiento social y político alternativo ligado históricamente al pensamiento de izquierda, deberán hacer esfuerzos grandes para replantear y renovar radicalmente su cultura política (sus discursos, prácticas e imaginarios políticos y culturales) que en medio de las hostiles circunstancias en que ha debi-



do desarrollarse en los últimos años, pero también de una manera religiosa de vivir la política en Colombia como cruzada o en términos de amigo-enemigo, termina a menudo respondiendo a la intolerancia y a la exclusión oficiales con similares actitudes, reproduciendo las concepciones y los discursos gastados de hace treinta años, los guiones mentales sectarios y dogmáticos, los viejos regímenes de verdad, y el funcionamiento de sus partidos como capillas o feudos personales.

Luego de la caída del muro de Berlín, de la disolución de la Unión Soviética y de los modelos políticos socialistas de inspiración soviética en los 90, con todo lo que ello implicó en términos de crisis y de desactivación política de la militancia política de izquierda, sobrevinieron el asesinato por las derechas aliadas con el narcotráfico, de líderes como Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, carismáticos, dinámicos y con un indudable poder de renovación, que hubieran podido jalonar sin ninguna duda, procesos de cambio y de democratización de la izquierda colombiana. El exterminio de la Unión Patriótica y el contexto nacional de copamiento de las regiones y de muchas de nuestras ciudades por el paramilitarismo durante los 90, así como la derechización política y cultural de la primera década del siglo XXI, han significado un escenario altamente hostil para el desenvolvimiento de opciones políticas democráticas desde la izquierda democrática colombiana.

Si bien se han dado algunas recomposiciones, renovaciones y actualizaciones dentro de algunos grupos de la izquierda colombiana, derivadas de los procesos de reinserción a la vida civil durante los 90, del M-19, el EPL, la Corriente de Renovación Socialista CRS, y el Movimiento

Armado “Quintín Lame”, y han surgido del seno de estas organizaciones algunas figuras individuales (líderes políticos y sociales, académicos, intelectuales y defensores de derechos humanos de reconocidas cartas democráticas), no es menos cierto que parte de esas vertientes que aparecían como promisorias, terminó durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas en Bogotá, en prácticas de corrupción y clientelismo similares a las de la politiquería bipartidista que históricamente criticaron.

Una recomposición democrática, no clientelista, meritocrática y en este último sentido, contracultural, de la izquierda, tendría que asumir algunos retos tales como la superación de la profunda brecha existente hoy entre los partidos de izquierda, el sindicalismo, el magisterio organizado y los movimientos sociales, de un lado, y el conocimiento de las ciencias sociales, las humanidades y las artes, de otro. En un contexto de alejamiento en las últimas dos décadas, de los académicos y los intelectuales, ya por hastío, por temor o por despolitización y pragmatismo, de los partidos de izquierda y los movimientos sociales, es muy difícil que puedan configurarse proyectos alternativos viables de sociedad con propuestas sectoriales de política pública que requieren hoy de la articulación de expertos y tecnócratas con vocación democrática y de transformación social.<sup>16</sup>

16 Subrayando estos problemas, tomo distancia de los discursos totalizantes que ven al magisterio como totalmente rutinizado y a la escuela pública como una institución totalmente devaluada simbólicamente e incapaz de competir con los medios de comunicación, “Los Simpson”, las TIC, las industrias culturales, las subculturas juveniles o los videojuegos. Igualmente, frente a los discursos acerca del sindicalismo como una institución completamente burocratizada, anacrónica en sus



Otro elemento clave que tendría que ser asimilado por este conjunto de actores colectivos articulados a la izquierda política, social y cultural, es el conocimiento y manejo práctico de la comunicación y de los medios masivos. Francisco Miranda, de la revista “Semana”, en el pasado Foro sobre Participación Política, organizado por mandato de la Mesa de Paz de La Habana, por la Universidad Nacional y Naciones Unidas, subrayaba precisamente cómo con las nuevas tecnologías se han disminuido sustancialmente las barreras de entrada a la emisión de nuevas opiniones e informaciones. Hay que trabajarle decididamente a esas nuevas posibilidades. Pero eso implica estudiar, observar con cierto nivel de desprevención y frescura los procesos sociales y culturales contemporáneos, superar aquello que Axel Honeth (1991) ha denominado “funcionalismo de izquierda”, es decir, el denunciismo y las viejas visiones monolíticas, defensivas y apocalípticas de los sistemas de medios, de las industrias culturales, y de los propios medios y tecnologías mediáticas<sup>17</sup>.

---

presupuestos ideológicos y corrupta. En esos dos sectores sociales hay grupos e individuos autocríticos y empeñados en trabajar por una modernización, actualización y renovación política, comunicativa y cultural (véase como ejemplo de esa crítica renovadora, el análisis sobre las comunicaciones del sindicalismo de Sol Astrid Giraldo (2005) publicado por la Escuela Nacional Sindical). Sin embargo, hay que reconocer que los fenómenos subrayados en esas críticas existen y tienen una fuerte presencia en la vida sindical y magisterial.

17 En un trabajo de consultoría relacionado con el tema de la superación de la victimización del movimiento sindical, adelantado a través de CODHES, he presentado una propuesta abierta y flexible, no taxativa en cuanto a autores y temas, de renovación cultural y comunicativa del sindicalismo, la cual podría

## CONCLUSIONES

La sociedad colombiana tiene una oportunidad única y tal vez la última, de lograr la reconciliación a través de una negociación de paz con las FARC y con el ELN.

El avance de las conversaciones requiere de una apertura política y mental de los distintos actores políticos y sociales, civiles y militares, que participan en la vida pública colombiana. En ese sentido es deber de todos los que aspiramos a un país en paz y sin guerra trabajar por que se produzcan las necesarias transformaciones comunicativas, de actitudes y de la cultura política de los distintos grupos y sectores involucrados en la confrontación armada.

Los colombianos necesitamos trabajar en la superación de nuestras arraigadas actitudes, prácticas y tradiciones de intolerancia política y cultural. Ellas se alimentan de modelos simplistas y sectarios de pensamiento y de conocimiento, de moral y de conducta, que por períodos y al calor de las polarizaciones políticas y de intereses económicos de la coyuntura histórica, adquieren connotaciones de cruzada religiosa contra quienes piensan y viven distinto o proponen otros modelos de Estado o de sociedad.

El sistema educativo, el periodismo y los medios públicos y privados, los académicos y los medios universitarios tendrían que desarrollar esfuerzos educativos y formativos para complejizar las visiones de los colom-

---

desarrollarse también con variaciones y cambios, desde los partidos de izquierda y desde el movimiento magisterial (López de la Roche, 2013).



bianos sobre su historia y los problemas y conflictos nacionales y regionales.

Un esfuerzo notable de equilibrio informativo, de dar acceso a diversas voces y de apertura al conocimiento de la verdad sobre el conflicto, por más dolorosa y reveladora que resulte para las distintas partes, tendrán que hacer los medios públicos y privados, sus directores y redactores, en el caso en que se cree una Comisión de la Verdad.

Los negociadores del gobierno y la guerrilla, los medios de comunicación, los periodistas, los académicos y demás formadores de opinión podrían empezar a coordinar perspectivas en la imaginación del posconflicto, diseñando de manera propositiva y constructiva escenarios de futuro para el país y la sociedad, con desarrollo, equidad, justicia, libertad; con oportunidades para todos y no sólo para los más astutos o mejor conectados políticamente<sup>18</sup>; con pluralismo profundo, reconocimiento de la diversidad y respeto por la vida humana.

A la clase dirigente le corresponderá trabajar en el diseño y montaje de una institucionalidad nueva y eficiente para las zonas rurales, y a los militares y fuerzas policiales garantizar la seguridad, que hasta ahora no han brindado a los líderes de restitución, a éstos y a los liderazgos sociales que surjan de la aplicación de las nuevas leyes agrarias que se adopten. Sin un combate decidido a las bandas criminales en amplias regiones de la geografía colombiana y sin unos nuevos consensos del gobierno nacional con las

elites locales y regionales, que respalden los procesos de paz y de restitución de tierras (James Robinson en entrevista de Zuluaga, 2013), y las Zonas de Reserva Campesina que se configuren, va a ser difícil la superación efectiva del conflicto, así se firme la paz.

Quiero concluir este conjunto de análisis y reflexiones con una frase de Fabrizio Hochschild, nuevo jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia, pronunciada desde su experiencia en políticas de paz en Kosovo, Burundi y Timor Oriental, cuya profundidad sugiero captar sobre todo a nuestros medios y a los periodistas que en ellos trabajan, con miras a pensar y diseñar una comunicación para la paz y el posconflicto:

“Me ha tocado vivir en otros países donde la guerra se ha prolongado y encuentro que muchas veces esta es vista como un estado casi normal. En esas circunstancias uno no se da cuenta del obstáculo que un conflicto representa para hacer progresos en tantas áreas, y eso no se puede subestimar, es enorme. [...]”

El conflicto no solo significa que hay gente que se mata, atrocidades, amenazas, minas, también implica que no hay un espacio para que el Estado cumpla su papel: establecer servicios de salud, educación, construir infraestructura, crear enlaces entre una economía local y una global y permitir la creatividad de los habitantes (Peña, 2013)”.

#### BIBLIOGRAFÍA

Bonilla, María Elvira, “La prueba ácida”, *El Espectador*, 22 de julio de 2013, p.30

Cañizalez, Andrés, (coordinador), *Tiempos de cambio. Política y comunicación en América Latina*, Konrad Adenauer Stiftung-ALAIC-Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2009

18 Véase la crítica del profesor norteamericano James Robinson (Zuluaga, 2013), de la Universidad de Harvard, a cómo se hacen las fortunas de los ricos hoy en Colombia.

- Carrizosa Umaña, Julio, “Verdades del Catatumbo”, *El Espectador*, martes 16 de julio de 2013, p. 3
- “Cuando ser bueno era malo”, *Semana*, 8-15 de julio de 2013, pp.38-39
- De la Torre, Cristina, “Catatumbo: la mesa auxiliar”, en *El Espectador*, 23 de julio de 2013, p. 28
- De Moraes, Denis, *La cruzada de los medios en América Latina. Gobiernos progresistas y políticas de comunicación*, Paidós, Buenos Aires, 2011;
- Del Águila, Rafael, “Rasgos básicos en la transformación de la cultura política española”, en Lechner, Norbert (compilador), *Cultura política y democratización*, CLACSO-FLACSO-ICI, Santiago de Chile, 1987
- Editorial El Tiempo sobre reelección de Rafael Correa en Ecuador, 24 de febrero de 2013
- “Esos temas no están aún sobre la mesa’: Farc”, en *El Espectador*, domingo 14 de julio de 2013, p.10
- Giraldo Escobar, Sol Astrid, *Una mirada a las comunicaciones del sindicalismo. Estudio de la imagen de la organización sindical en los medios masivos de comunicación*, Escuela Nacional Sindical, Medellín, 2005
- “Gobierno señala a instigadores de la violencia en paro”, *El Tiempo*, 20 de julio 2013, pp. 1-2
- Honneth, Axel, “Teoría crítica”, en Giddens, Anthony, Jonathan Turner y otros, *La teoría social hoy*, Alianza Editorial-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes CONACULTA, México, D.F., 1991
- “Impactos del Catatumbo”, en *El Espectador*, martes 23 de julio de 2013, p. 2
- Iturralde, Manuel, “Un gobierno pro ricos”, en *Semana.com*, 16 de septiembre de 2009, bajado 23 de septiembre de 2009, 7:43 A.M.
- Kalmanovitz, Salomón, “El triunfo de Correa en Ecuador”, en *ElEspectador.com*, 24 de febrero de 2013, bajado 28 de julio de 2013, 4:59 P.M.
- “La ‘denuncia’ del presidente Santos”, *El Espectador*, 20 de julio de 2013, pp.6-7
- “Las FARC, dispuestas a revisar “errores” en aras de la reconciliación”, en *Periódico La Jornada*, con información de Reuters y AFP, Sábado 4 de mayo de 2013, p. 21, bajada 4 de agosto de 2013, 8:33 A.M. de <http://www.jornada.unam.mx/2013/05/04/mundo/021n2mun>
- López de la Roche, Fabio, *Izquierdas y cultura política ¿Oposición alternativa?*, CINEP. Bogotá, 1994
- López de la Roche, Fabio, *Periodismo y movimientos sociales: entre la estigmatización y el reconocimiento*, Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura – IECO – Politécnico Grancolombiano, Bogotá, 2002
- López de la Roche, Fabio, “Discurso presidencial y noticieros de T.V. (2002-2010) La reorientación afectiva de la nación”, *Revista Javeriana*, Bogotá, marzo de 2010
- López de la Roche, Fabio, “DEL URIBISMO DOCTRINARIO A LA RECUPERACIÓN SANTISTA DEL ESPÍRITU LIBERAL EN LA COMUNICACIÓN. Concentración económica y alineamiento ideológico de los medios en Colombia, en contextos de hegemonía neoliberal, de polarización política derivada del conflicto armado y de ciudadanía comunicativa deficitaria”. Ponencia presentada a la reunión del seminario del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) “Comunicación y Política en el Capitalismo Contemporáneo”, realizada en la ciudad de La Paz (Bolivia), los días 18 y 19 de junio de 2012.
- López de la Roche, Fabio, “Propuesta para la formulación de una estrategia de comunicación que contribuya a la superación de la victimización del sindicalismo y los sindicalistas y de un proyecto cultural y comunicativo que posibilite una reparación transformadora”, en Varios Autores, *Proyecto Reparación Colectiva del Movimiento Sindical en Colombia: Memoria Histórica y Garantía de los Derechos de sus Víctimas. Elementos de Política Pública para la Reparación Individual, Colectiva y Política de la Victimización del Movimiento Sindical Colombiano*, CUT-CTC-Fecode-ISCOD-Colombia- Em-



- bajada de España en Colombia-AECID-COD-HES, abril de 2013
- “No hay porqué temerle a la ONU’. ONG rechazan decisión del presidente Santos de retirar la oficina de esa entidad en Colombia”, *El Espectador*, jueves 18 de julio de 2013, p.3
- Orozco, Cecilia, “El presidente está nervioso”, *El Espectador*, 24 de julio de 2013, p.30
- Ospina, William, “Antes de que el arco se rompa”, en *El Espectador*, domingo 21 de julio de 2013
- Pardo, Daniel, “Pacific ES Colombia”, en revista “Kién y Ké”, 13 de octubre de 2012, bajada el 28 de julio de 2013, 8:23 P.M., de <http://pardo-daniel.wordpress.com/tag/pacific-rubiales/>
- Peña, Edulfo, “Paz no puede ser un papel con 10 firmas”. Entrevista a Fabrizio Hochschild, *El Tiempo*, domingo 5 de mayo de 2013, p.2
- Rangel Garzón, Paula, “Una sentencia poco sofisticada”, en: *Semana.com* 22 de julio de 2013, bajada 29 de julio de 2013.
- Retberg, Angelika y Omar Rincón (compiladores), *Medios, democracia y poder*, Universidad de los Andes, Bogotá, 2011
- Rico, Laura, “Anglogold Ashanti, abriéndose campo en el Tolima”, en *Lasillavacía.com*, Miércoles 7 de julio de 2010, bajada 28 de julio de 2013, 8:46 P.M.
- Robinson, Henry, “Iván Márquez visto desde Irlanda”, *El Espectador.com*, 24 marzo de 2013, bajado 12 de julio de 2013, 9:50 A.M.
- Rodríguez Garavito, César, “El país de Pacific Rubiales”, *Elespectador.com*, 24 Sep 2012, bajado 28 de julio 2013, 7:32 P.M.
- Rodríguez Garavito, César, “Kien es kién en Pacific Rubiales”, *Elespectador.com*, 29 de octubre de 2012, bajado 28 de julio 2013, 7:53 P.M.
- Rodríguez Garavito, César, “Derechos humanos: un paso adelante, otro atrás”, en *El Espectador*, 23 de julio de 2013, p. 29
- Ronderos, María Teresa, “Los pueblos Potemkin del gobierno Santos”, en *El Espectador*, viernes 19 de julio de 2013, p. 30
- Samper, María Elvira, “Ciegas, sordas y cortas de seso”, en *El Espectador*, domingo 12 de mayo de 2013, p. 42
- Samper Pizano, Daniel, “Poderosas pautas publicitarias para paralizar periodistas”, *Eltiempo.com*, 3 de noviembre 2012
- Samper Pizano, Daniel, “En Colombia llovizna y en Inglaterra diluvia”, *Eltiempo.com*, 18 de noviembre de 2012
- Sel, Susana (coordinadora), *Políticas de comunicación en el capitalismo contemporáneo. América Latina y sus encrucijadas*, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, Buenos Aires, 2010
- Semana, “Para poner a pensar a Colombia”, en *Semana*, Edición No. 1630, 29 de julio al 5 de agosto de 2013, pp. 34-37
- Uprimny, Rodrigo, “Una página de prensa es suficiente...”, en *El Espectador*, domingo 21 de julio de 2013, p.43
- Valencia, León, “Recomendada para izquierdistas”, en *Semana.com*, 29 de marzo de 2013, bajada 5 de abril de 2013, 8:14 P.M.
- Zuluaga, Camila, “Protestar es sano para una sociedad”. Entrevista al profesor James Robinson de la Universidad de Harvard, en *El Espectador*, martes 23 de julio de 2013